

Carta Semanal n.º 447

del Comité Central del POSI - Del 18 al 24 de noviembre de 2013

COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 79:

“La lucha del proletariado contra la guerra es la continuación de su lucha de clase”

(programa fundacional de la IV Internacional, 1938)

La huelga indefinida en la limpieza viaria de Madrid obliga a retirar los despidos

Los trabajadores y sindicatos de la limpieza viaria y la jardinería de Madrid decidieron enfrentarse al ERE de las empresas (FCC, Sacyr, OHL) que suponía 1134 despidos y recortes de salario. *“Ningún despido, ningún recorte salarial”*.

Consiguieron unir a todos los sindicatos para ir a la huelga indefinida, sobre la que no había acuerdo inicialmente.

Durante 13 días han mantenido la huelga, han mantenido la unidad frente a las provocaciones de la alcaldesa Botella, del gobierno Rajoy y de los medios de comunicación que mentían y les insultaban a todas horas. Fracasó la intoxicación: el pueblo de Madrid ha apoyado a los barrenderos y jardineros. Han recibido muestras de

apoyo de trabajadores de Madrid y de todo el Estado.

Se han mantenido firmes frente al intento de romper la huelga con esquirols, sin caer en provocaciones. Los trabajadores de la empresa pública Tragsa, víctimas de otro ERE, se negaron masivamente. Tragsa tuvo que recurrir a una ETT para contratar a unos pocos.

En la madrugada del domingo la patronal tuvo que retirar TODOS los despidos, comprometerse a mantener íntegro el salario en tablas.

Claro, los patronos no renuncian a sus objetivos de reducir plantilla y abaratar su coste: regulación rotatoria y otras medidas. Aislados por la política de los dirigentes que no quieren organizar la

movilización unida para derrotar a Rajoy, los barrenderos y jardineros han llegado sin embargo muy lejos.

Todos los trabajadores han visto que es posible hacer retroceder a los gobiernos y a los patronos. Es posible impedir los despidos. Hay que lograr la retirada de la reforma de pensiones, de la reforma local, de la reforma educativa. Hace falta que las organizaciones exijan sin fisuras la retirada, negándose a “negociar” la forma de aplicar los recortes. Ningún despido, ningún recorte de pensiones, movilización unida hasta ganar.

Remitimos a nuestros lectores al documento sobre las lecciones de la huelga de limpieza que Información Obrera prepara, y que estará en circulación desde mañana.

El cierre de Canal 9 contra los trabajadores y las libertades

El martes 5 de noviembre, 7 horas después de conocer la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulando el ERE que supuso el despido de 1.000 trabajadores de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el gobierno valenciano anunció su cierre. *“La Generalitat no puede asumir el coste de readmitir a los despedidos (40 millones de euros) y no va a cerrar un hospital o un colegio para mantener RTVV”*, declaraba Alberto Fabra, presidente de la Generalitat.

De todos es sabido que la deuda de Canal 9 (1.200 millones de euros) se debe al robo a manos llenas de los recursos públicos, a la manipulación política y a los negocios del PP durante 20 años. Sólo la visita del Papa a Valencia (investigada como pieza de la trama Gürtel), los derechos deportivos con equipos de fútbol, la Fórmula 1 y la Copa América suponen desembolsos ruinosos de 180 millones de euros, a los que hay que sumar contrataciones millonarias de directivos de confianza y el dinero pagado a productoras externas por programas como tarots y teletienda u otros que ni se han emitido por su baja calidad, y que ha ido creciendo año a año: 35 millones de euros en 1999 y 45 millones

de euros pagados por producción externa en 2007. Producto de la manipulación y de la baja calidad es el 1% de audiencia media de RTVV. Ya ni como instrumento de propaganda le sirve al PP.

La reacción de los trabajadores y de la población al anuncio del cierre de RTVV ha ido desde la toma del control de la programación de la cadena por los trabajadores del medio hasta las manifestaciones masivas y la concentración espontánea de un millar de trabajadores ante el palacio de la Generalitat reclamando el mantenimiento de Canal 9 y la dimisión del Presidente autonómico. Sin embargo, los dirigentes sindicales se han limitado a acompañar el proceso, sin adoptar ningún compromiso, sin ninguna lucha por levantar a los trabajadores y al pueblo contra el cierre y contra un gobierno autonómico desprestigiado, odiado, dividido y aislado como no hemos visto antes. Un gobierno que, para provocar el enfrentamiento y así tratar de mantenerse, ha encargado un informe al “Alto Consejo Consultivo” de la Generalitat, formado entre otros por Ramón Tamames y José Barea, que ventea todos los agravios entre comunidades autónomas para reclamar un nuevo sistema

de financiación autonómica, basado en la “eficiencia en la gestión” de los servicios (¿cómo la de RTVV?), es decir, en las políticas de austeridad y privatización.

Pero, más allá de las cuestiones locales, el cierre de RTVV es un síntoma de la bancarrota del Estado de las autonomías sobre el que se asientan la Monarquía y el aparato de Estado heredado del franquismo. Se trata de un ataque en la línea de flotación al sector público, al derecho a usar la propia lengua, a la cultura y a la libertad de expresión. Y, de la misma manera que la Generalitat Valenciana ha sido y es pionera en la privatización de la sanidad y del sector público empresarial, ahora se pone en vanguardia del cierre de las televisiones autonómicas.

La veda la abrió el gobierno Rajoy en 2012, con una modificación de la legislación audiovisual que abre la puerta a la privatización y prohíbe el endeudamiento de las televisiones autonómicas. Su aplicación se plasma en planes de ajuste en todas ellas.

Telemadrid tiene una historia paralela a Canal 9: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado improcedente el ERE del canal regional (860 despidos), la sentencia ha sido recurrida y al presidente

de la Comunidad, Ignacio González, le ha faltado tiempo para declarar que si el Supremo ratifica la sentencia cerrará Telemadrid. TV-3, tras recibir 1.000 millones de euros del gobierno catalán, ha cerrado un canal, fusionado dos, pasado a Internet la emisora internacional, renegociado contratos con las productoras y planteó reducir 500 puestos de plantilla, que han sido 250 tras consensuar con los sindicatos el plan. Dolores de Cospedal pretende vender la televisión de Castilla-La Mancha. Valcárcel busca la oportunidad para cerrar la televisión de Murcia. Y así, en distintos grados, las 13 televisiones autonómicas.

Con las formas particulares que le corresponden al sector audiovisual, la esencia de este proceso se identifica con la actuación de las autonomías en general: corrupción y negocios para los grupos empresariales afines al gobierno de turno, privatización de la sanidad y de los servicios públicos, deterioro económico, formas dictatoriales de ejercicio del poder, parlamentos e instituciones impotentes para controlar todo esto. El estado autonómico, levantado en la transición para impedir el ejercicio del derecho de autodeterminación en el País Vasco y en Cataluña, se manifiesta cada vez más como un Estado parasitario y artificial. Es necesario desmantelarlo para que sea posible reconstruir la economía, recuperar los puestos de trabajo destruidos, la sanidad y la enseñanza públicas y se haga posible el pleno ejercicio de la democracia por los pueblos.

Estamos comprobando es que las instituciones autonómicas son instituciones parasitarias y corruptas, sometidas a las exigencias de Bruselas y del capital internacional. Por ejemplo, en 2014 destinarán 4.400 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat al pago de la deuda a los bancos mientras se cierran escuelas rurales y plantas de los hospitales públicos, como exigen los tratados de la UE y la reforma de la Constitución.

Sólo una unión libre de pueblos y naciones, emancipadas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, cimentada en la unión de los trabajadores y de sus organizaciones, puede garantizar

las conquistas sociales y los servicios públicos, incluyendo la TV como instrumento cultural, de información y de defensa de la lengua. Con este objetivo, la defensa de los servicios públicos, los derechos y conquistas sociales y de la democracia, por la fraternidad entre los pueblos sindicalistas y militantes obreros se dirigen a todos los sindicalistas y militantes del movimiento obrero del Estado español para impulsar este combate en unidad y convocan **conferencia obrera para el próximo mes de abril**.

En lo inmediato, más arriba decíamos que los dirigentes sindicales no habían asumido su responsabilidad movilizándolo con reivindicaciones claras a los trabajadores y al pueblo valenciano contra el cierre de RTVV. Lo mismo podemos decir de los grupos políticos Socialista, de Compromís y de EUPV. Todos han pedido la dimisión del presidente Fabra (lo que indica la disposición de los trabajadores y la juventud valencianas a echarlo, a él, a su gobierno y a las políticas de ajuste) y elecciones anticipadas a Cortes. Y bien, ¿qué movilización organizan para echarlo?

Tampoco es solución la negociación de un plan de "viabilidad" para RTVV con el comité de empresa, como reclaman PSPV-PSOE, EUPV y Compromís; por su parte, los dirigentes sindicales han adoptado la misma "propuesta". Si se acepta como ineludible el pago de la deuda y el recorte del déficit, cualquier solución de este tipo supone despidos y, con el tiempo, el cierre y privatización de Canal 9. Quien con mayor claridad se ha expresado al respecto es Rosa Vidal, directora general de RTVV recién dimitida. Según ella, ante la sentencia de nulidad del ERE, "lo más real y de menor coste era tomar medidas, bajar sueldos, hacer prejubilaciones y un nuevo ERE."

Hay que salvar Canal 9 y todos los puestos de trabajo. Es responsabilidad de los gobernantes que han sido elegidos para defender los intereses del pueblo valenciano, y si no lo hacen, que se vayan. Corresponde a los dirigentes políticos y sindicales que hablan en nombre de los trabajadores y del pueblo valenciano organizar la movilización unida hasta echar a Fabra y salvar todos los puestos de trabajo de Canal 9.

En la calle, el número 21 del boletín del CATP

Los compañeros del CATP presentan en reuniones, estos días, su boletín del mes de noviembre para extender las campañas que promueven.



Este boletín recoge los acuerdos que tomó la Coordinadora Estatal del CATP, que se reunió el 26 de octubre pasado, y una extensa crónica del acto que se celebró en Madrid, a propuesta de "Sindicalistas por el derecho a decidir", y que el CATP apoyó. Esta crónica también incluye amplios extractos de las intervenciones de los ponentes y del público.

La reunión de la Coordinadora puso en el centro de su actividad, la **campaña por la retirada de la reforma de las pensiones**, elemento central de la política del gobierno Rajoy al dictado de la UE e integrada en los presupuestos del Estado para 2014.

También tuvo un lugar destacado, la difusión y extensión del llamamiento "Por la fraternidad entre los pueblos", por el derecho de autodeterminación y la unidad de los trabajadores para defender las conquistas comunes.

Podéis encontrar este boletín en el blog del *Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos*:

<http://informacionobrero.org/catpblog>

Recibe esta carta semanal en tu correo electrónico

Te invitamos a que la recibas cada semana. Puedes apuntarte:

- Enviando un correo electrónico a inforposi@gmail.com
- En nuestra Web: <http://cartas.posicuarta.org>



Partido Obrero Socialista Internacionalista
Sección en España de la IV Internacional

Calle Desengaño, 12 (1º 3A). 28004 - Madrid
Teléfono: 91 522 23 56 - Fax: 91 521 72 01
<http://www.posicuarta.org>
Búscanos en Twitter: @posicuarta

